FIP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

DINÁMICAS DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA Y SU IMPACTO HUMANITARIO Y AMBIENTAL

TENDENCIAS EN LA PANDEMIA

ENERO A ABRIL DE 2020

DINÁMICAS DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA Y SU IMPACTO HUMANITARIO Y AMBIENTAL

TENDENCIAS EN LA PANDEMIA
ENERO A ABRIL DE 2020

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FIP
María Victoria Llorente

COORDINADOR DEL INFORME
Juan Carlos Garzón Vergara
Director Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Ángela Silva y Catalina Riveros
Investigadoras*

***Con el apoyo del equipo de Dinámicas del Conflicto**

Edición:
Martín Franco Vélez

Fotografía Portada:
Makalu / Pixabay

Diseño y diagramación:
Ladoamable
www.ladoamable.com

ISBN:
978-958-5517-48-6

Bogotá, Colombia 2020

Contenido

Presentación 4

Combates de la Fuerza Pública y acciones de los grupos armados organizados 7

Disputas entre grupos armados organizados y dinámicas de gobernanza ilegal 10

Los homicidios en las zonas de implementación del Acuerdo de Paz 13

Agresiones y homicidios de líderes sociales 16

Homicidios de excombatientes 18

Desplazamientos forzados 19

Minas antipersonal 21

Impacto ambiental 23

Presentación

En este informe, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza las dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario a partir de la información cuantitativa disponible, leída desde el seguimiento regional y el trabajo de campo. Aunque el objetivo es identificar tendencias y advertir sobre los cambios, no pretende dar una mirada exhaustiva de los que sucede en los territorios.

Este es el primer informe de seguimiento que hacemos en medio de la pandemia; por eso, decidimos poner un foco especial en lo que ha ocurrido a partir de la adopción de las medidas para responder al covid-19 en marzo y abril de 2020. En medio de la incertidumbre actual, es relevante mencionar que no identificamos a la pandemia como una causa, si no más bien como un dinamizador que puede intensificar o —en algunos casos— desacelerar las dinámicas de violencia y de confrontación armada.

En todo caso, los posibles efectos de la pandemia no apuntan a una sola dirección, sino que son heterogéneos: varían dependiendo del territorio y las variables que se seleccionen. Además, las tendencias generales pueden tener importantes excepciones en el nivel local.

Destacados del primer cuatrimestre de 2020

- **La confrontación armada continúa activa,** con el aumento de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública y de los grupos armados organizados. Sin embargo, su letalidad ha disminuido: menos miembros de la Fuerza Pública mueren o resultan heridos. También, hay una caída en el número de integrantes de los grupos armados organizados que han resultado muertos en operaciones.
- Los **grupos armados de mayor actividad fueron el ELN y las disidencias de las FARC**, pero la mayoría de los combates de la Fuerza Pública se dirigieron contra el Clan del Golfo y Los Caparros.
- A nivel nacional, los **homicidios disminuyeron 16%**. En el caso de los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la baja fue del 12%.
- Las **agresiones a líderes sociales aumentaron un 10%, y los homicidios 53% (49 casos)**. El mayor número de casos se encuentran en Cauca, Putumayo y Antioquia.
- Los **desplazamientos forzados tuvieron un incremento del 5%**, concentrándose en Nariño, Putumayo y Antioquia.
- Continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han intensificado.

Durante la pandemia (marzo y abril de 2020)

- Los combates de la Fuerza Pública no tuvieron variaciones significativas, mientras que **las acciones de los grupos armados organizados disminuyeron.**

- Hay grupos armados ilegales que han ordenado restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus; en otros casos, las facciones armadas han incrementado sus acciones contra los líderes y las comunidades.

- El **cambio más relevante se da en la disminución de los homicidios**, con descensos notables, especialmente en abril. Preocupa el incremento reciente de las muertes violentas en Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle).

- Respecto al número de homicidios de líderes sociales y excombatientes, la pandemia no parece tener efectos en las tendencias que se venían presentando. Sin embargo, sí **hay un incremento en los desplazamientos forzados y en las víctimas de minas antipersonal.**

Las regiones de mayor preocupación

La intensificación de la confrontación armada —con el aumento de la violencia y el impacto humanitario— se concentra en regiones específicas del país. En el siguiente mapa se pueden observar los municipios con incrementos en las cifras de una o más de las siguientes variables: 1) Acciones de los grupos armados organizados (como hostigamientos y emboscadas, así como ataques a la población y bienes civiles); 2) Homicidios; 3) Homicidios de líderes sociales; y 4) Eventos de desplazamiento forzado (Ver Mapa 1).

En el primer cuatrimestre de 2020, las zonas de mayor preocupación, con disputas activas entre grupos armados ilegales que no surgen en este periodo, pero que sí se intensifican, son:

- El Pacífico nariñense
- El sur del Valle y el norte del Cauca
- El centro y la costa pacífica en el Cauca
- El departamento de Putumayo
- La herradura que va desde el Urabá antioqueño, pasando por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar y llegando hasta el Catatumbo, en Norte de Santander
- El norte del Chocó

Es importante señalar que en buena parte de estas zonas la presencia de la Fuerza Pública ha sido reforzada, sin que esto signifique que hayan mejorado las condiciones de seguridad.

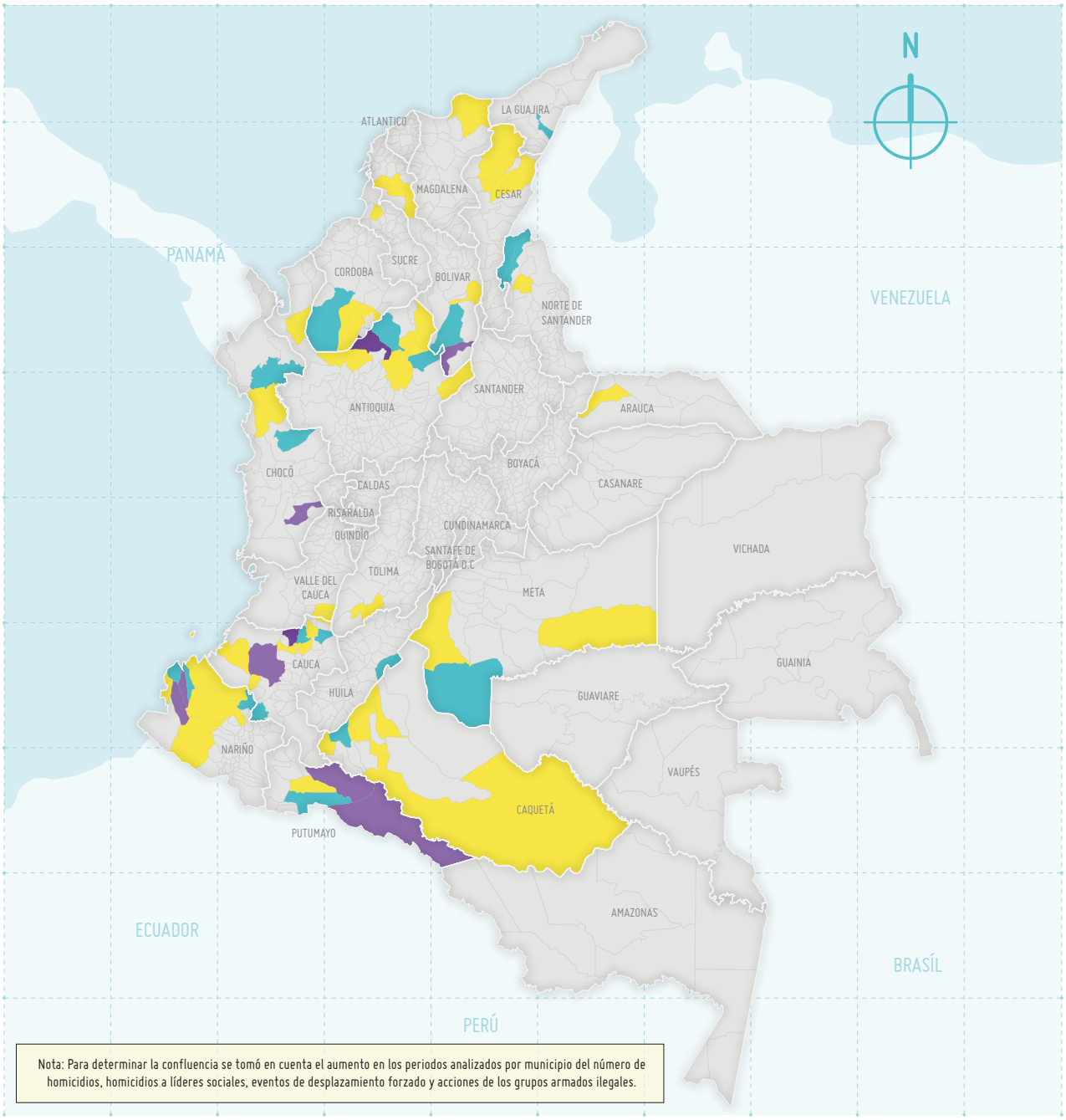
Se destacan, además, regiones donde se evidencia la incursión de grupos armados organizados, lo que ha generado la intensificación de la confrontación armada y los índices de violencia:

- Los Montes de María
- El norte de Boyacá
- El sur del Tolima
- El sur de la Guajira y el norte del Cesar
- Algunas áreas del sur del Meta, Caquetá y Guaviare

No hay una única explicación para lo que ocurre en estos departamentos y regiones. En este informe, solo destacaremos algunas dinámicas locales que sirvan como guía para analizar las tendencias y los datos. En todo caso, no hay que perder de vista que detrás de los números, se encuentran personas y poblaciones en contextos de inseguridad que comprometen sus capacidades, libertades y derechos.

MAPA 1.

INTENSIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA EN MUNICIPIOS PDET (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020 RESPECTO AL MISMO PERÍODO EN 2019)



Nota: Para determinar la confluencia se tomó en cuenta el aumento en los periodos analizados por municipio del número de homicidios, homicidios a líderes sociales, eventos de desplazamiento forzado y acciones de los grupos armados ilegales.

CONVENCIONES

LÍMITE DEPARTAMENTAL

LÍMITE MUNICIPAL

CONCURRENCIA DE DINÁMICAS

SIN CONFLUENCIA: UNA DINÁMICA

CONFLUENCIA MODERADA: DOS DINÁMICAS

CONFLUENCIA ALTA: ENTRE TRES Y CUATRO DINÁMICAS

Fuente: Base de Datos de Líderes Sociales de la FIP

1. Combates de la Fuerza Pública y acciones de los grupos armados organizados

En el primer cuatrimestre de 2020 aumentaron las acciones vinculadas a la confrontación armada, que incluyen los combates de la Fuerza Pública contra las organizaciones armadas ilegales de distinta denominación y las acciones realizadas por las diferentes estructuras armadas.

El seguimiento de la FIP a la prensa nacional y regional —complementado con otras fuentes— revela que los combates se incrementaron un 32%. La mayoría de estas acciones (38%) estuvieron dirigidas contra el Clan de Golfo (autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y una escisión de esta estructura conocida como Los Caparros. Luego vienen los combates contra el ELN y las disidencias de las FARC (cada una con el 31%).

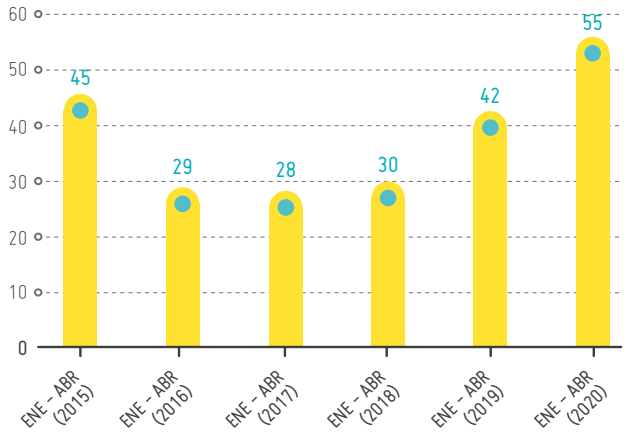
Tres departamentos concentraron el 72% de los combates de la Fuerza Pública contra los grupos armados organizados: Antioquia (especialmente en los municipios de Cáceres, Ituango y Tarazá); Cauca (en el norte, con acciones contra la Columna Móvil Dagoberto Ramos), y Norte de Santander.

Por su parte, en el primer cuatrimestre de 2020 se dio un incremento del 30% en las acciones de los grupos armados organizados. Se destaca el alza en los hostigamientos y emboscadas a la Fuerza Pública, la quema de vehículos, los ataques a la infraestructura petrolera y los ataques a la población y bienes civiles. El 80% de las acciones se concentraron en los departamentos de Norte de Santander (29%), Cauca (16%), Nariño (13%), Antioquia (11%) y Arauca (11%).

El grupo de mayor actividad es el ELN, seguido por las disidencias de las FARC. Muy por debajo se encuentra el Clan de Golfo, con una tendencia a la baja en sus acciones armadas.

GRÁFICO 1.

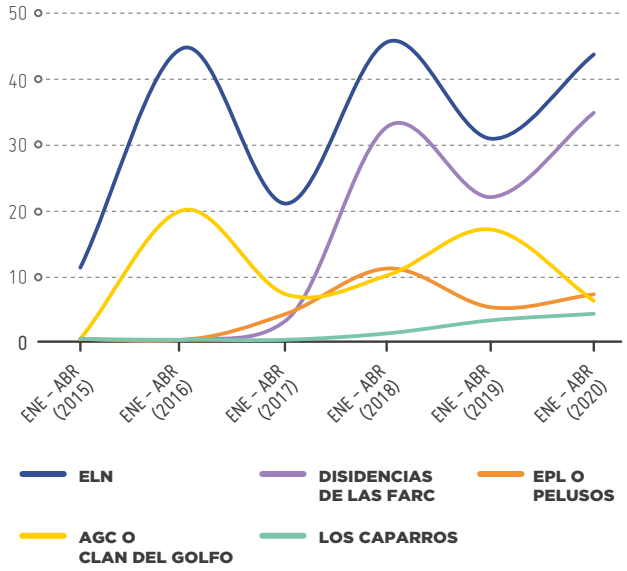
ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA



Fuente: Bases de Datos del Conflicto de la FIP

GRÁFICO 2.

ACCIONES GRUPOS ARMADOS IDENTIFICADOS

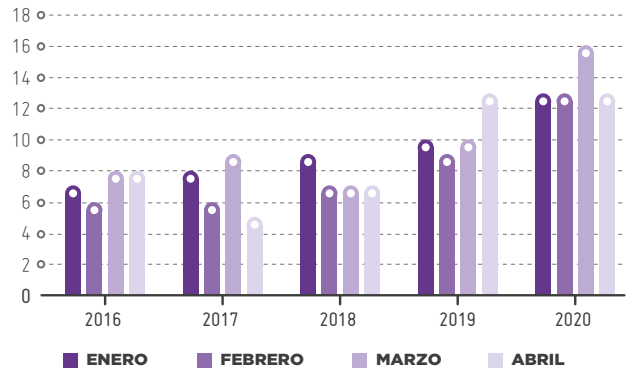


Fuente: Bases de Datos del Conflicto de la FIP

Durante la pandemia, mientras los combates de la Fuerza Pública no tuvieron variaciones significativas —y, por el contrario, se mantuvieron en un nivel alto—, las acciones de los grupos armados organizados han disminuido. Esto se explica en parte porque en febrero, durante los paros armados del ELN y el EPL en la región de El Catatumbo, en Norte de Santander, se tuvo un pico en las acciones, seguido por un descenso jalonado luego de la declaración del cese al fuego por parte del ELN, en abril.

GRÁFICO 3.

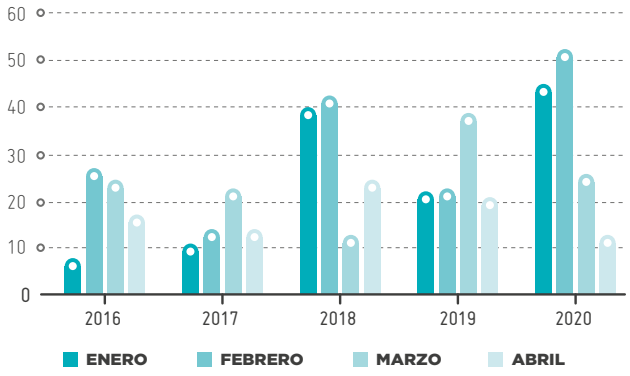
COMBATES DE LA FUERZA PÚBLICA CONTRA GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS



Fuente: Bases de Datos del Conflicto de la FIP

GRÁFICO 4.

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS



Fuente: Bases de Datos del Conflicto de la FIP

A pesar del aumento en las acciones ofensivas de la Fuerza Pública —como los hechos protagonizados por los grupos armados organizados— descendió el número de combatientes muertos en estos eventos, es decir que la letalidad ha disminuido (lo cual se explica en parte porque los grupos armados ilegales se repliegan y evaden la confrontación abierta con el Estado). Así lo muestran las cifras del Ministerio de Defensa en el primer cuatrimestre del 2020, comparándolas con el mismo periodo de los años anteriores.

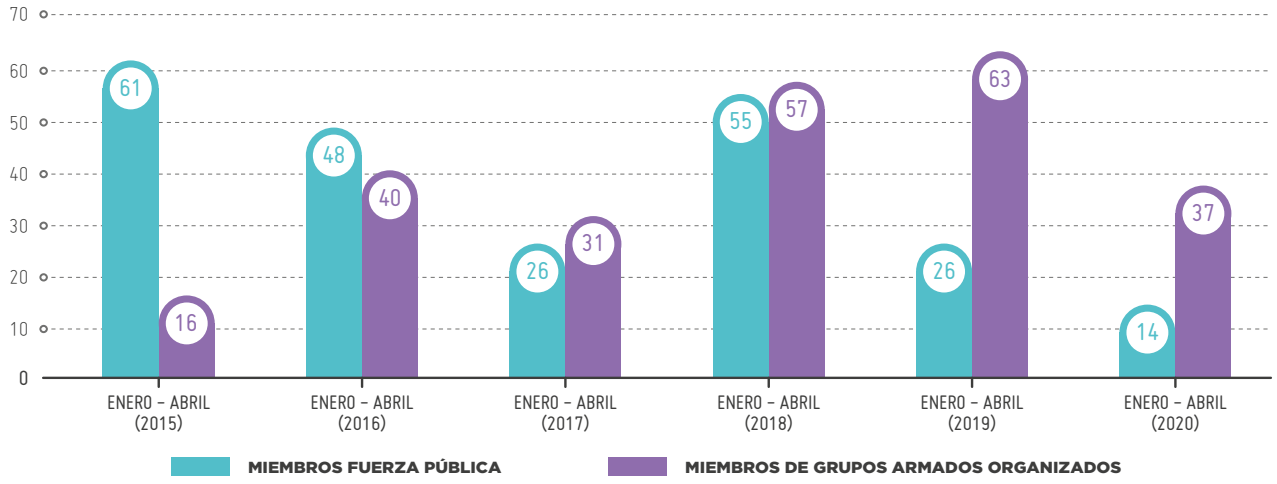
La tendencia hacia la reducción en el número de miembros de la Fuerza Pública asesinados y heridos, comenzó a manifestarse durante el proceso de diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y ha continuado en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz (Ver Gráficos 5 y 6).

Según el Ministerio de Defensa, hay un descenso en las capturas de integrantes de los grupos armados organizados: en el caso del ELN, la baja es del 71%; en el de otras organizaciones, del 33%.

DURANTE LA PANDEMIA, MIENTRAS LOS COMBATES DE LA FUERZA PÚBLICA NO TUVIERON VARIACIONES SIGNIFICATIVAS —Y, POR EL CONTRARIO, SE MANTUVIERON EN UN NIVEL ALTO—, LAS ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS HAN DISMINUIDO

GRÁFICO 5.

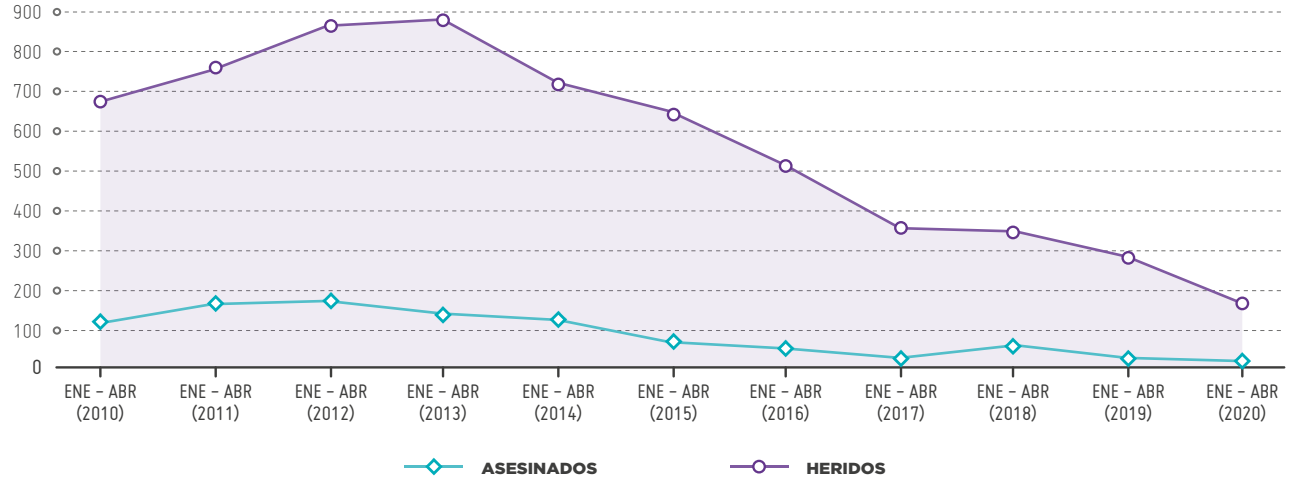
MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ASESINADOS EN SERVICIO E INTEGRANTES DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS MUERTOS EN OPERACIONES



Fuente: Ministerio de Defensa, FIP

GRÁFICO 6.

MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ASESINADOS Y HERIDOS EN ACTOS DE SERVICIO



Fuente: Ministerio de Defensa

2. Disputas entre grupos armados organizados y dinámicas de gobernanza ilegal

Las disputas por el control del territorio continúan en distintas zonas del país, con efectos heterogéneos en las dinámicas de violencia y el impacto humanitario. Como veremos más adelante, mientras que el número de homicidios en buena parte de estas zonas disminuyó, el asesinato de líderes sociales y los desplazamientos aumentaron.

En el análisis de la FIP evidenciamos que en algunas regiones del país continúa una disputa activa, con enfrentamientos entre facciones armadas, mientras que en otras hay equilibrios frágiles y divisiones territoriales inestables. Además, hay zonas donde los grupos armados organizados consolidan su influencia y otras donde inicia su incursión.

Aunque en estos cuatro escenarios el elemento dinamizador común son las economías ilegales, es relevante mencionar que, en el centro de la confrontación armada, están el control territorial y las regulaciones ilegales de distinto tipo (la gobernanza criminal). La relación con las comunidades varía dependiendo de la zona, pero en todos los casos está mediada por el uso de la violencia y la intimidación.

En el contexto de la pandemia, este tipo de regulaciones e interacciones se vuelven más evidentes. Algunos grupos armados impusieron restricciones y reforzaron el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus. En otros casos, las facciones armadas incrementaron sus acciones contra los líderes y las comunidades como forma de reforzar su control territorial. Las variaciones en este comportamiento dependen de si las organizaciones tienen el monopolio de la regulación ilegal, si hay una coexistencia donde comparten fronteras frágiles con otros grupos o si están en medio de una disputa.

En todo caso, más que generar nuevas dinámicas, la pandemia puede ser aprovechada por los grupos armados organizados para incursionar en nuevos territorios o afianzar su control ilegal. En esta medida, antes que una causa, puede ser entendida como un acelerador.

Respecto a las **zonas de disputa**, se destacan:

- **Chocó,** con el enfrentamiento entre las AGC y el ELN por el control territorial y el de economías como el narcotráfico y la minería ilegal. Comunidades indígenas y afrodescendientes han denunciado un incremento del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos como estrategia para reforzar sus filas. Al sur, entre el municipio del Litoral de San Juan y Buenaventura (Valle del Cauca), se han registrado disputas entre el ELN y disidentes del Frente 30 de las FARC por el control de los esteros para el tráfico de armas, narcotráfico, la minería y explotación de madera ilegal.

- **Norte de Cauca y Jamundí, en el Valle del Cauca,** con el incremento en los ataques por parte de las disidencias de las FARC a la población. Tienen influencia las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, y se habla de una tercera disidencia que quiere entrar en el territorio.

- **Centro y sur del Cauca,** protagonizada por la disidencia Carlos Patiño de las FARC y el ELN. En medio de la disputa por el control de las ru-

tas de narcotráfico con salida al Pacífico caucano se han presentado enfrentamientos y homicidios selectivos en zonas de difícil acceso.

- **Pacífico nariñense,** con la reconfiguración de las disidencias y enfrentamientos entre las distintas facciones. En este escenario, los grupos armados han amenazado y prohibido a las comunidades realizar algún tipo de denuncia o desplazarse a otras veredas y a las cabeceras municipales.

- **En el Pacífico caucano** se han registrado enfrentamientos entre disidentes del antiguo frente 30 de las FARC y el ELN por el control de las rutas para el narcotráfico y las zonas mineras.

- **Murindó, Vigía del Fuerte, Dabeiba y Frontino, en Antioquia,** con enfrentamientos entre las AGC y el ELN.

- **Bajo Cauca,** Norte de Antioquia y Sur de Córdoba, con la influencia del AGC, los Caparros y las disidencias de las FARC. También hay presencia del ELN en el suroriente del Bajo Cauca, aunque no se registran enfrentamientos con las demás estructuras armadas.

- **Catatumbo, en Norte de Santander,** en donde continúa la disputa del ELN y EPL a través de paros armados en febrero y la reconfiguración de estructuras en la línea fronteriza. A este escenario de disputa se suma la presencia de, por lo menos, tres estructuras disidentes de las FARC.

- **Bajo Putumayo,** donde se han presentado enfrentamientos entre una estructura disidente llamada Frente Carolina Ramírez y el grupo conocido como *"La Mafia"* —conformado por disidentes de los frentes 15, 32, 48, 49 y la Constru— por el control territorial y de rutas estratégicas para el narcotráfico y el tráfico de armas.

Se encuentran también **zonas con equilibrios frágiles y divisiones territoriales inestables**:

- **Arauca,** donde el ELN sigue siendo el actor preponderante. El fortalecimiento de las disidencias de las FARC, sin embargo, podría ser un factor de inestabilidad. Hasta el momento, se presenta un escenario de coexistencia.

- **Sur de Bolívar,** donde el ELN —que ha tenido una presencia histórica en esta región— ha buscado consolidarse en zonas rurales de municipios como Morales y Santa Rosa del Sur. Las comunidades han denunciado un incremento del reclutamiento forzado y el uso de menores, siembra de MAP-MUSE y amenazas a líderes. Pese a ello, sigue habiendo un control de las AGC en las cabeceras municipales.

Además, resaltan como **zonas de mayor consolidación**:

- **La Sierra Nevada de Santa Marta,** con un incremento en las acciones del grupo conocido como Los Pachenca, que habría generado alianzas con las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS). Esto ha coincidido con el incremento en los homicidios a líderes de Juntas de Acción Comunal.

- **Sur del Meta, Caquetá y Guaviare,** con la influencia de grupos armados conformados

por disidentes de los extintos frentes 1, 7, 40, 62 y Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC. Estas estructuras han logrado reagruparse y trabajar coordinadamente con una división territorial, que les permite un mayor control. Se han presentado agresiones contra el personal de Parques Naturales y otros funcionarios públicos vinculados a la protección del ambiente.

- **Urabá Antioqueño: Eje Bananero y los municipios del norte de la subregión** persisten como núcleo de dominio del AGC, quienes ejercen control social a través de esquemas de tercerización y subestructuras urbanas.

Finalmente, hay **zonas de incursión** por parte de grupos armados ilegales que buscan expandir sus fuentes económicas y territoriales:

- **Norte de Boyacá,** donde incursionaron facciones del ELN provenientes de Arauca y han generado alertas por el asesinato de líderes sociales y funcionarios ambientales, además de amenazas a funcionarios públicos.

- En el **sur del Tolima** incrementó del accionar de grupos ilegales conformados, principalmente, por disidentes de las FARC. La estructura Dagoberto Ramos —proveniente del Cauca— estaría llevando a cabo extorsiones y secuestros. Además, se han presentado amenazas a funcionarios públicos y a líderes sindicales y políticos.

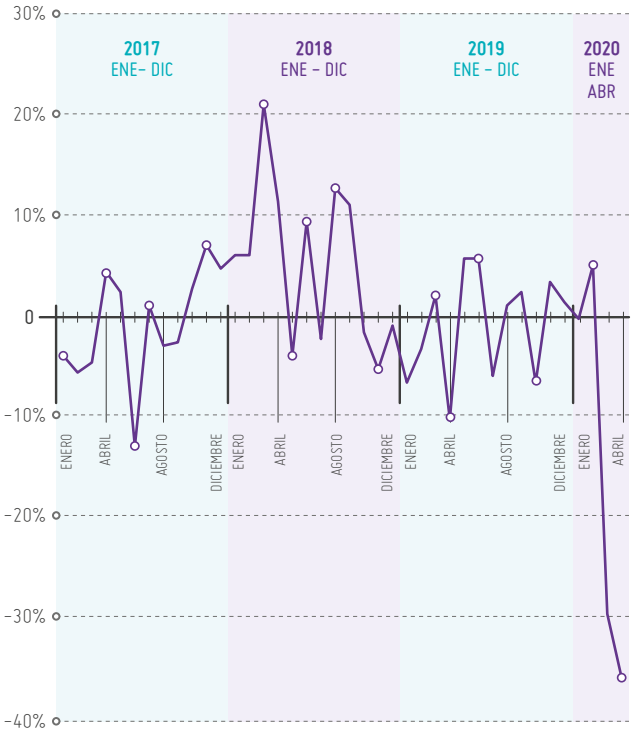
3. Los homicidios en las zonas de implementación del Acuerdo de Paz

Durante el primer cuatrimestre de 2020, los homicidios a nivel nacional disminuyeron 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es notable el descenso que se da en medio de la pandemia en el número de muertes violentas, el cual comienza en marzo y se profundiza en abril.

En el siguiente gráfico comparamos los homicidios de cada mes, en relación con el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, mientras que en abril de 2019 el número registrado de muertes violentas fue de 1.004, en abril de 2020 bajó a 646 (lo que equivale a un descenso del 36%).

GRÁFICO 7.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL



Fuente: FIP, basado en Policía Nacional

Al comparar los municipios donde se vienen implementando los programas derivados del Acuerdo —como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)— se encuentra que, mientras que en los primeros se da una reducción del 12%, en los segundos el número de muertes violentas permaneció estable (con respecto a los mismos meses de del 2019) (Ver Gráfico 8 y 9).

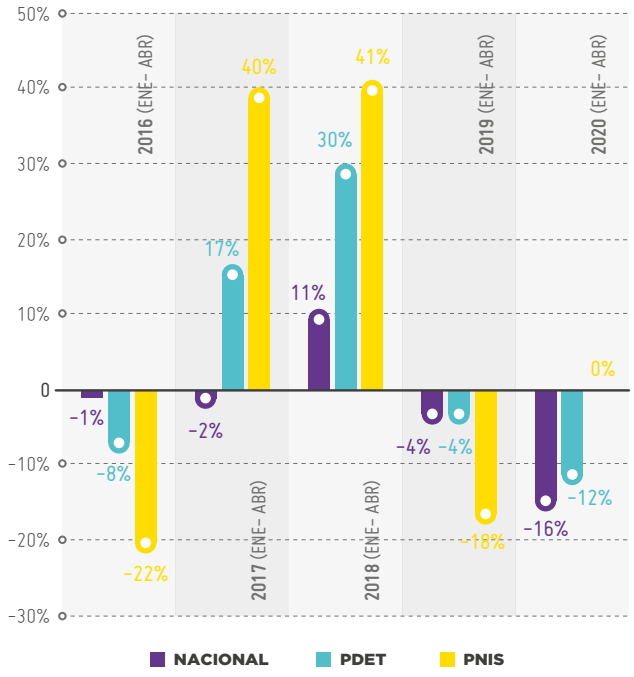
En cuanto a lo que ha ocurrido durante la implementación de las medidas para responder a la pandemia, en los municipios PDET ya se venía de una tendencia a la baja, que se profundizó en los meses de marzo y abril. El peor momento se dio en el segundo semestre de 2017, y durante 2018, que fue un periodo intenso de reconfiguración de los grupos armados ilegales y de enfrentamientos por el control territorial. Si bien en 2019 se dieron algunos meses con descenso, el comportamiento fue similar al del 2018. En 2020 se alcanzan las bajas más pronunciadas por cuenta del covid-19 (Ver Gráfico 10).

Teniendo en cuenta lo ocurrido en los primeros cuatro meses de 2020, y comparándolo con el mismo periodo del año anterior, encontramos que en cuatro de los 12 municipios PDET con el mayor número de homicidios se presentó un aumento: Santa Marta, en Magdalena; Tarazá y Segovia, en Antioquia; y El Tambo, en el Cauca.

Es relevante mencionar que, si bien la tendencia general es a la disminución de los homicidios en municipios PDET, ha habido algunas excepciones durante la implementación de las medidas para responder a la pandemia (Ver Tabla 1).

GRÁFICO 8.

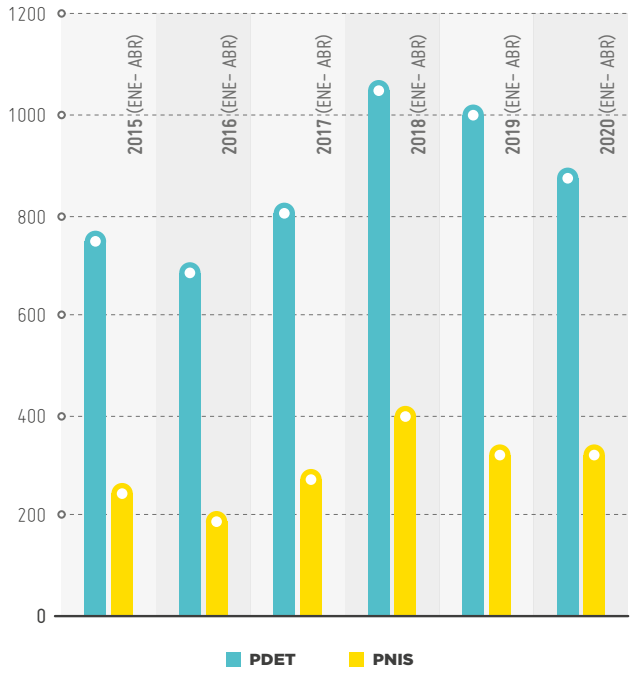
VARIACIONES DEL HOMICIDIO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE CADA AÑO



Fuente: FIP con base en Policía Nacional

GRÁFICO 9.

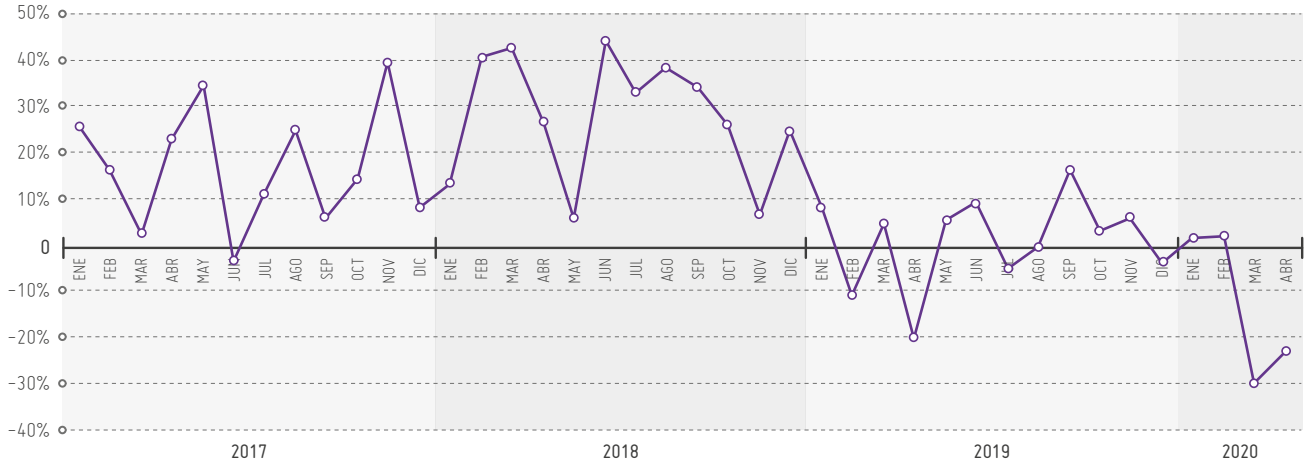
HOMICIDIOS EN LOS MUNICIPIOS PDET Y PNIS



Fuente: FIP con base en Policía Nacional

GRÁFICO 10.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS HOMICIDIOS EN LOS MUNICIPIOS PDET



Fuente: FIP con base en Policía Nacional

TABLA 1.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL

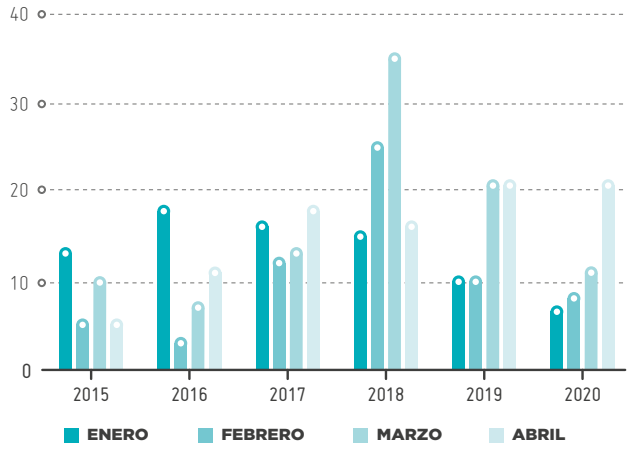
MUNICIPIO	ENE-ABR 2019	ENE-ABR 2020	VARIACIÓN
TUMACO (NARIÑO)	53	50	-6%
SANTA MARTA (MAGDALENA)	39	41	5%
BUENAVENTURA (VALLE)	36	33	-8%
CÁCERES (ANTIOQUIA)	34	26	-24%
CAUCASIA (ANTIOQUIA)	50	24	-52%
TARAZÁ (ANTIOQUIA)	16	23	44%
EL TAMBO (CAUCA)	8	22	175%
TURBO (ANTIOQUIA)	22	21	-5%
VALLEDUPAR (CESAR)	25	20	-20%
SEGOVIA (ANTIOQUIA)	17	20	18%
CORINTO (CAUCA)	31	19	-39%
TIBÚ (NORTE DE SANTANDER)	31	19	-39%

En el caso de Tumaco, el incremento respondería a los reacomodos de grupos armados ilegales y su disputa por el control territorial y de las economías ilegales. También en Buenaventura se evidenció un aumento en los homicidios como respuesta a disputas entre grupos delincuenciales en la zona urbana del municipio. En ambos casos, la población joven ha sido la más afectada.

Los homicidios en las zonas de disputa entre grupos armados durante los primero cuatro meses de 2020 se redujeron, con una única excepción: el Pacífico nariñense, donde aumentaron un 8%. De esta región se resalta el incremento en los municipios de Olaya Herrera y Roberto Payán en, al menos, 10 casos cada uno.

GRÁFICO 11.

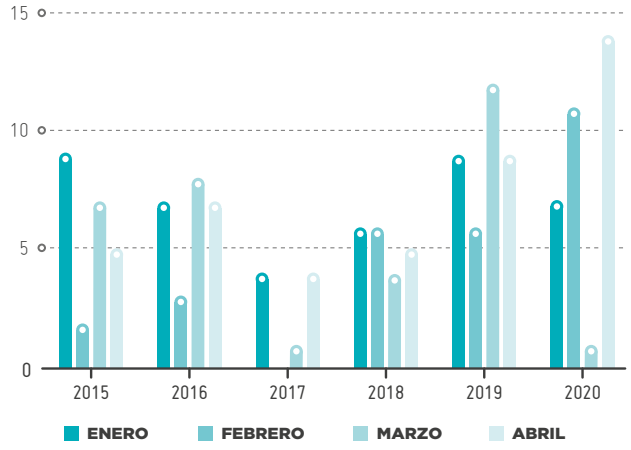
HOMICIDIOS EN TUMACO



Fuente: Policía Nacional

GRÁFICO 12.

HOMICIDIOS EN BUENAVENTURA



Fuente: Policía Nacional

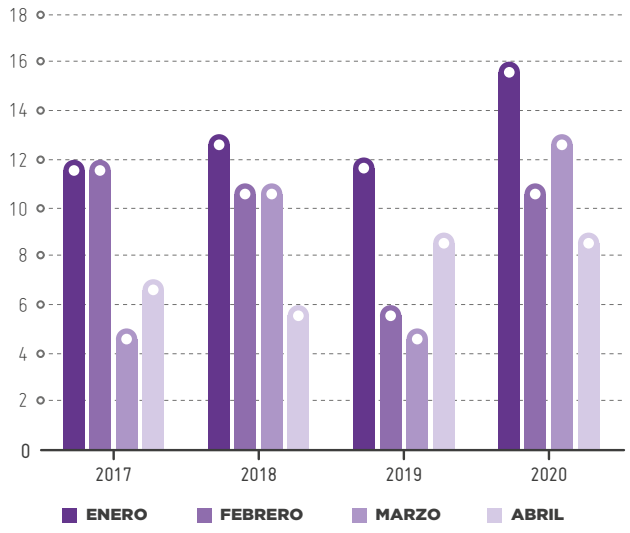
4. Agresiones y homicidios de líderes sociales

Entre enero y abril del 2020 las agresiones a líderes aumentaron un 10%, mientras que los homicidios un 53% (49 casos). Además de las muertes violentas (43% del total de agresiones), se encuentran amenazas (36%), casos de desplazamiento forzado (10%) y tentativas de homicidio (9%).

Es relevante mencionar que, a nivel nacional, los meses con más casos de homicidio fueron enero y febrero; es decir, los anteriores a la implementación de las medidas para enfrentar la pandemia, siendo enero el peor mes.

GRÁFICO 13.

HOMICIDIOS DE LÍDERES SOCIALES



Fuente: Base de datos FIP

Los departamentos más críticos durante el primer cuatrimestre de 2020 fueron Cauca (con 14 homicidios), Putumayo (6) y Antioquia (5). En cuanto a la autoría, aunque el 67% de los responsables de los homicidios es aún es desconocido, grupos como las disidencias de las FARC y las AGC comenzaron a tener una mayor visibilidad en la atribución de las agresiones.

Los líderes más afectados continúan siendo los presidentes de Juntas de Acción Comunal (33%), campesinos (20%) e indígenas (12%). Se resalta el aumento en los homicidios a líderes sindicales en las regiones del norte y sur del Cauca y Putumayo.

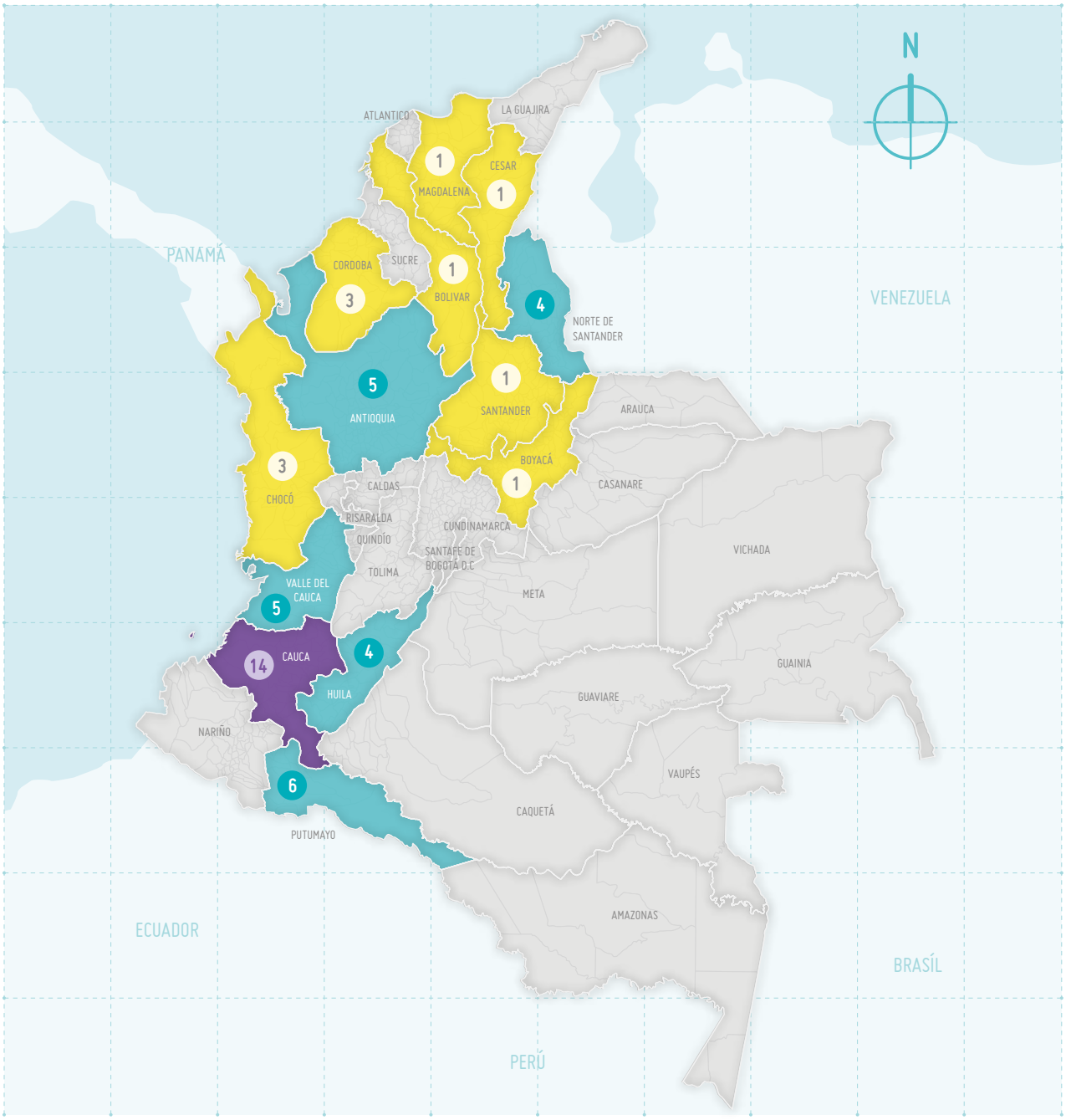
En medio de esta pandemia, diferentes instituciones y organizaciones sociales han hecho un llamado a reforzar las medidas de protección. La Procuraduría pidió a la Unidad de Protección incrementar las acciones, instando al Ministerio del Interior, la Fuerza Pública y a los alcaldes y gobernadores a cumplir con sus responsabilidades.

La Comisión de Paz del Senado, por su parte, realizó un debate en el que participaron los ministros de Defensa y Justicia, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, el Comisionado de Paz, el Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Ministra del Interior. En este escenario, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión, señaló que durante el 2020 se reportaron 64 casos de homicidio, de los cuales la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado 13 y otros 43 todavía están por determinar si encajan en la agresión por causa del liderazgo.

En el informe *"Impactos y riesgos del covid-19 en la paz y las dinámicas del conflicto"*, publicado en marzo, desde la FIP advertimos que la restricción a la movilidad puede aumentar la vulnerabilidad de estas personas, volviendo sus rutinas y ubicación mucho más previsibles. Además, señalamos que existe el riesgo de que se disminuya la capacidad de atención de las instituciones para las agresiones a líderes y lideresas por cuenta de la reorientación que tomen las actividades de las instituciones del Estado y la Fuerza Pública con el fin de hacer cumplir las medidas del covid-19.

MAPA 2.

HOMICIDIOS DE LÍDERES SOCIALES



CONVENCIONES

LÍMITE DEPARTAMENTAL

LÍMITE MUNICIPAL

NÚMERO DE CASOS

ENTRE 1 Y 3

ENTRE 4 Y 6

MÁS DE 7

Fuente: Base de Datos de Líderes Sociales de la FIP

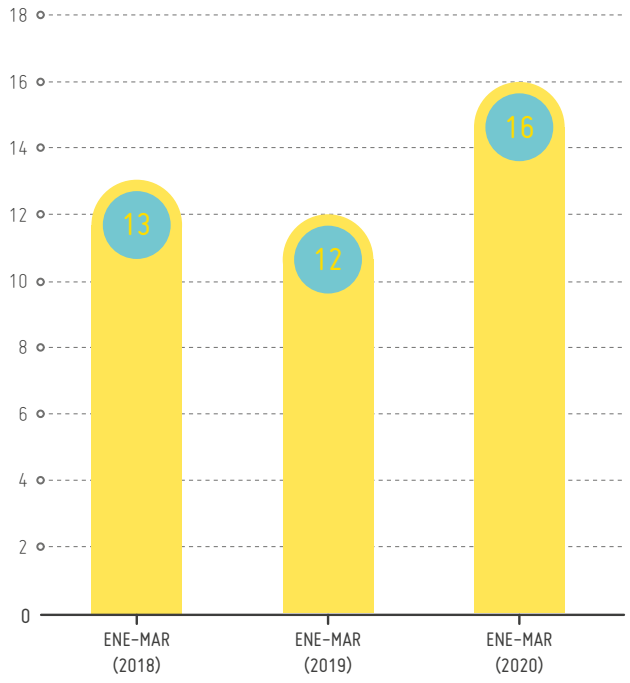
5. Homicidios de excombatientes

De acuerdo con la información de la Misión de Verificación de la Naciones Unidas, durante el primer trimestre del año fueron asesinados 16 excombatientes (lo que significa un aumento del 33% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 12 casos).

En el primer cuatrimestre de 2020, la FIP ha identificado —a través del seguimiento de prensa y otras fuentes— el homicidio de 21 excombatientes. Teniendo en cuenta el comportamiento de los homicidios entre enero y abril, no encontramos una variación significativa en los meses en los cuales se implementaron las medidas para responder a la pandemia (Ver Gráfico 12).

GRÁFICO 14.

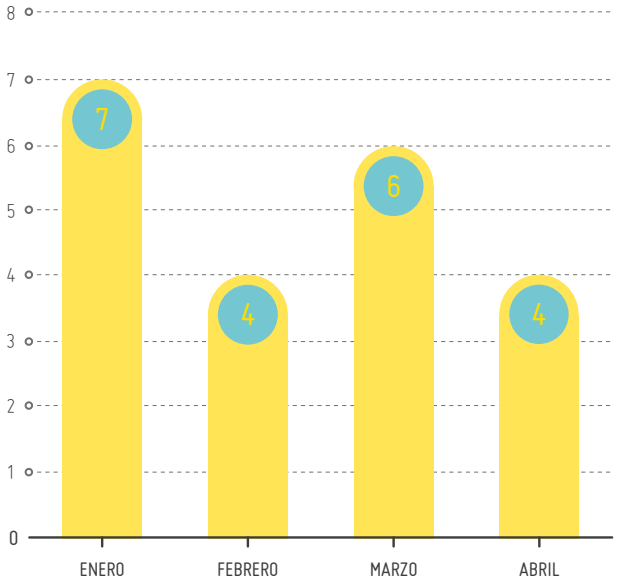
HOMICIDIOS DE EXCOMBATIENTES DE LAS FARC EN EL PRIMER TRIMESTRE (2018-2020)



Fuente: Misión de Verificación de ONU

GRÁFICO 15.

HOMICIDIOS DE EXCOMBATIENTES DE LAS FARC (PRIMER CUATRIMESTRE 2020)



Fuente: Base de datos de la FIP

El 86% de las víctimas eran hombres y el 14% mujeres. Respecto a la ubicación geográfica, los departamentos con el mayor número de casos son Meta (6), Antioquia (3), Caquetá (2) y Chocó (2). Los municipios con los registros más altos son Macarena, en el Meta, y Quibdó, en Chocó (que concentran el 24% de los casos).

La falta de garantías de seguridad para algunos excombatientes los ha obligado a abandonar los lugares donde adelantaban su proceso de reincorporación, incluidos algunos ETCR, como ha ocurrido en Cauca y Antioquia. Además, la Fuerza Pública ha participado en operativos para trasladar a algunos excombatientes y sus familiares tras haber sido declarados objetivo militar por parte de grupos como las AGC en Ituango (Antioquia).

6. Desplazamientos forzados

De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), durante los primeros cuatro meses de 2020 los desplazamientos forzados aumentaron un 5%: pasaron de 55 eventos en enero a abril de 2019, a 58 en este periodo. El 57% de los casos fueron desplazamientos masivos y el 43% del tipo individual.

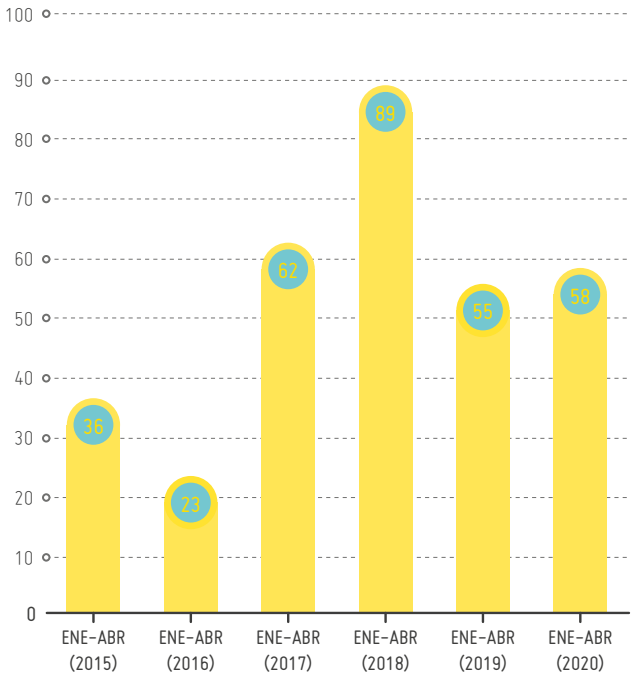
En cuanto a lo que ha ocurrido con las medidas de restricción de movilidad para responder a la pandemia, en abril se revirtió la tendencia a la baja de los primeros tres meses del 2020.

El municipio de Puerto Asís (Putumayo) presenta el mayor número de casos por desplazamientos del tipo individual (13), mientras que Roberto Payán y Olaya Herrera (Nariño) concentran los desplazamientos masivos (11).

Casi el 80% de los desplazamientos se concentraron en solo tres departamentos: Nariño, Putumayo y Antioquia (Ver Tabla 2).

GRÁFICO 16.

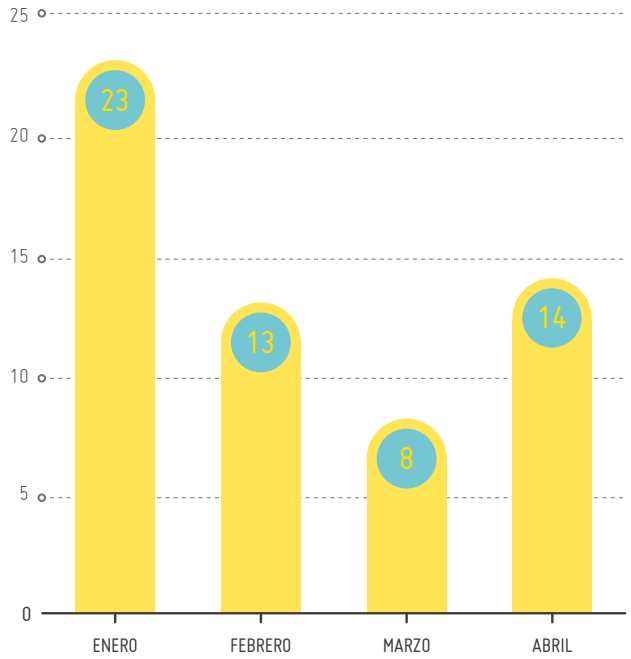
EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO (ENERO-ABRIL 2015 / ENERO-ABRIL 2020)



Fuente: OCHA

GRÁFICO 17.

EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO PRIMER CUATRIMESTRE 2020



Fuente: OCHA

TABLA 2.

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DESPLAZAMIENTO
NARIÑO: **18 EVENTOS**	• Roberto Payán • Olaya Herrera • Magüí Payán • Francisco Pizarro • Santa Bárbara	• Desplazamientos masivos provocados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales —como las disidencias de las FARC— por el control territorial. Se dan principalmente en zonas aledañas a ríos, que se constituyen como zonas estratégicas para la salida del narcotráfico.
PUTUMAYO: **17 EVENTOS**	• Puerto Guzmán • Puerto Leguizamo • Puerto Asís	• Desplazamientos de tipo individual provocados por amenazas a líderes sociales, funcionarios públicos y personas vinculadas con el proceso de sustitución de cultivos. Este tipo de amenazas se suman a los homicidios selectivos que han provocado temor en familias y comunidades, quienes optan por desplazarse para evitar retaliaciones.
ANTIOQUIA: **10 EVENTOS**	• Tarazá • Cáceres • Ituango	• Se presentan del tipo individual y masivo. Los individuales se asocian con amenazas a líderes sociales que han denunciado el accionar de los grupos y a profesores de zona rural que carecen de garantías de seguridad para ejercer la docencia. Los masivos siguen siendo provocados por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. En ellos se han visto involucrados las AGC, Los Caparros y la disidencia del frente 18 de las FARC.

7. Minas antipersonal

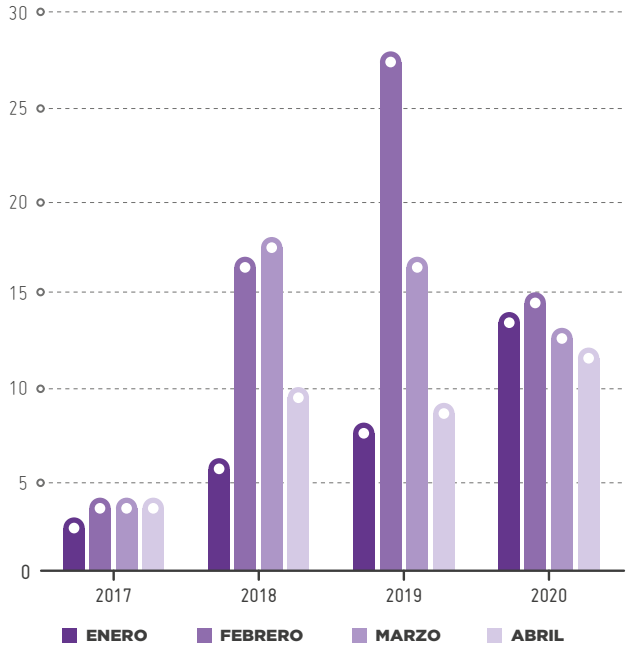
Las víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar disminuyeron un 13% en el primer cuatrimestre del año, con respecto al mismo periodo de 2019. Esto significa un cambio de tendencia si tenemos en cuenta lo sucedido en 2018 y 2019. Llama la atención que, en medio de las medidas de restricción a la movilidad por la pandemia, el descenso que se dio en abril de 2020 no sea mayor.

El 80% de las víctimas en el periodo de enero a abril de 2020 eran civiles, y el 20% integrantes de la Fuerza Pública. El 53% de las víctimas civiles pertenecían a población afrodescendiente y un 26% a comunidades indígenas. El 60% de los accidentes ocurrieron en campos abiertos y caminos por los que transitan las comunidades para ejercer labores agrícolas.

La situación es alarmante en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Antioquia, donde concentran, en lo que va corrido del año, el 87% de las víctimas. Además, hay una alta concentración a nivel municipal, pues el 60% de los casos se presentaron en cinco municipios: Maguí Payán (7), Tarazá (7), Ábrego (6), Frontino (6) y Roberto Payán (6). Para el Catatumbo y Nariño, especialmente, este fenómeno se relaciona con la práctica de blindar las zonas de cultivo con minas antipersona que hacen estructuras del narcotráfico para evitar la erradicación manual.

GRÁFICO 18.

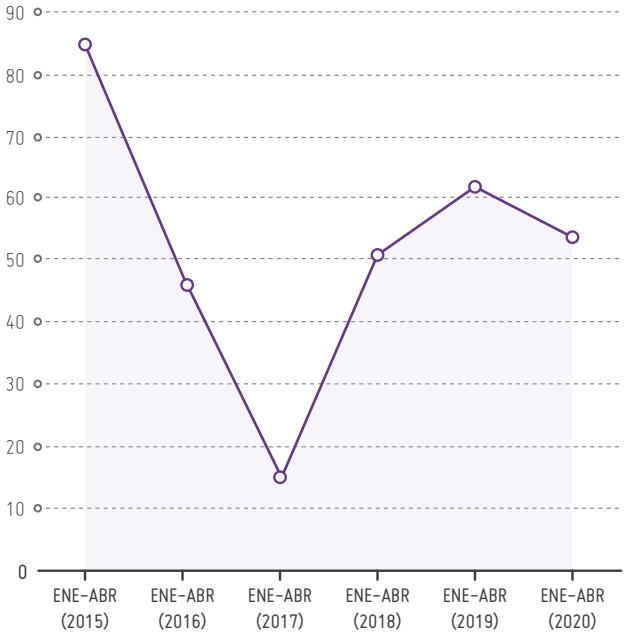
VÍCTIMAS POR MAP-MUSE



Fuente: Descontamina Colombia

GRÁFICO 19.

VÍCTIMAS POR MAP-MUSE



Fuente: Descontamina Colombia

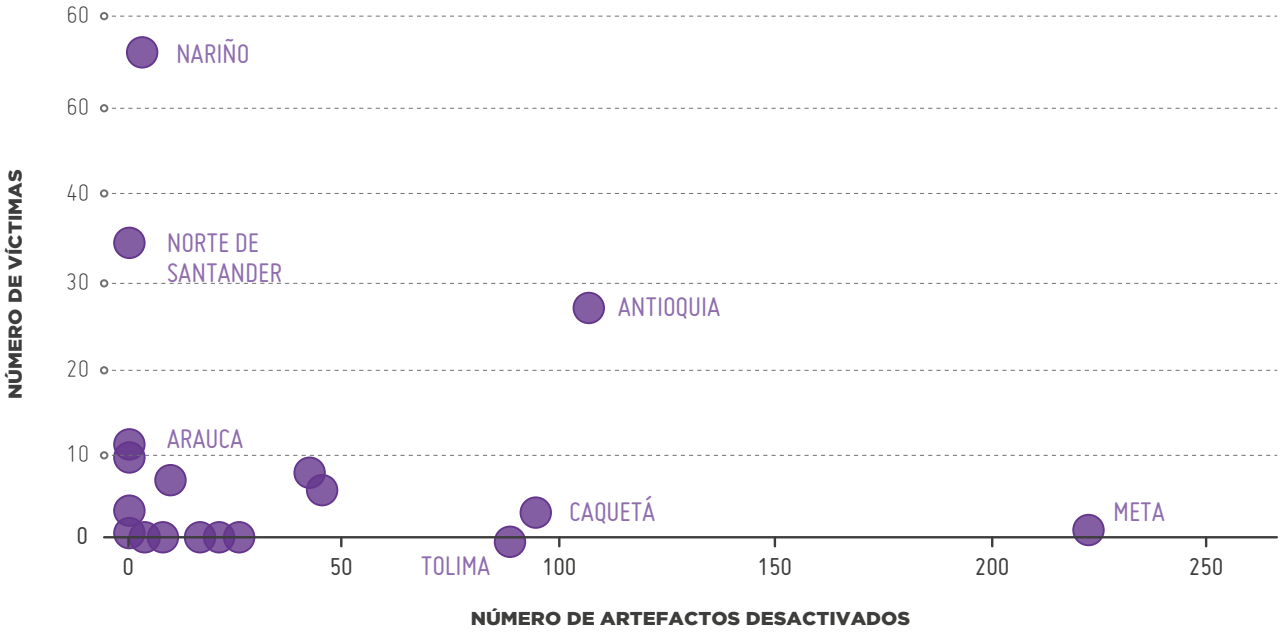
En cuanto a la prevención de accidentes por MAP-MUSE, llama la atención que los operativos de desminado humanitario no se realizan, necesariamente, en los lugares donde se están presentando las cifras más altas de víctimas. Esto se debe, principalmente, al difícil acceso a zonas rurales y los bajos niveles de garantías de seguridad para los operarios de desminado, además de la complejidad del proceso de estudio y declaración de áreas peligrosas.

En la actual coyuntura del covid-19, gran parte de las operaciones de desminado humanitario se detuvieron, lo que ha incrementado el riesgo de vulnerabilidad de la población en zona rural. Solo la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército sigue operando y ha realizado, en el último año, más del 50% de las operaciones.

A eso se suman las denuncias, por parte de comunidades, líderes y organizaciones sociales, de que grupos armados ilegales han sembrado minas en zonas como el Sur de Bolívar, Catatumbo y Chocó, como estrategia de contención de operaciones de la Fuerza Pública y mecanismo de control social.

GRÁFICO 20.

RELACIÓN ENTRE VÍCTIMAS POR MAP-MUSE Y OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO



Fuente: Descontamina Colombia

8. Impacto ambiental

Aunque todavía no hay reportes oficiales sobre deforestación en los primeros cuatro meses del año, diversas fuentes señalan que el fenómeno no se ha detenido y que ha seguido afectando territorios amazónicos, orinocenses, chocoanos, de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Catatumbo (todos ellos importantes enclaves de biodiversidad). Algunas de las zonas más afectadas por la deforestación han sido el resguardo indígena Nukak, en el departamento del Guaviare; y los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Sierra de La Macarena, ubicados en el Área de Manejo Especial de La Macarena, en el Meta.

Las autoridades ambientales y organismos de control han manifestado su preocupación porque quienes están talando y tumbando los bosques —actores armados, colonos y acaparadores de tierras, entre otros— están sacando provecho de la emergencia sanitaria. Mientras tanto, las autoridades ambientales se encuentran con las manos atadas debido a las restricciones en la movilidad. A los retos impuestos por la pandemia, se suman los riesgos generados por las amenazas que recibieron funcionarios de los Parques Nacionales de la región de la Amazonia por parte de estructuras disidentes de las FARC.

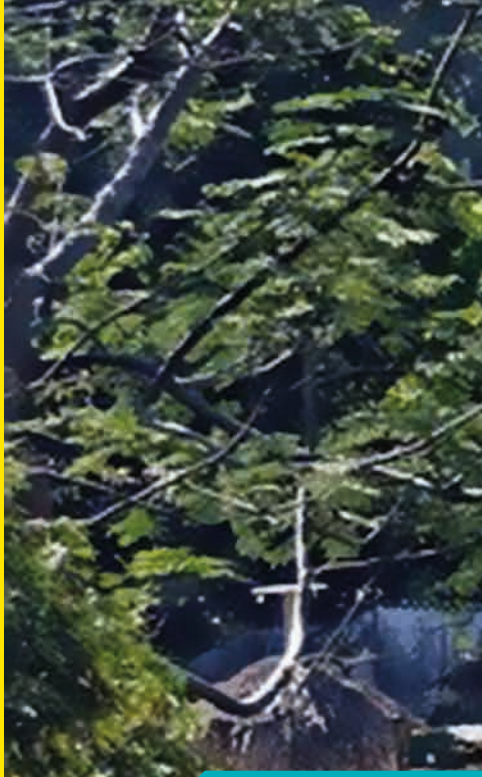
Hechos como esos motivaron al Procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios a solicitarle al presidente Iván Duque declarar la situación de emergencia ecológica y climática en el territorio nacional, de tal forma que se faciliten la implementación de medidas efectivas contra la deforestación.

De otro lado, el pueblo Wiwa, de la Guajira, denunció que durante la pandemia se ha exacerbado la minería ilegal en su territorio, una actividad que adelantan al menos 100 personas ajenas a la comunidad en un predio que les pertenece o que hace parte de su territorio ancestral. Según han manifestado las autoridades indígenas y sus defensores, las personas que realizan estas actividades portan armas y tienen relación con grupos armados. Esta comunidad indígena teme que su presencia incremente el riesgo de contraer covid-19, ya que los mineros entran y salen del territorio sin utilizar elementos de protección o bioseguridad.

Varios ambientalistas han advertido que la minería se incrementará después de la pandemia, debido a la crisis económica generalizada y porque, a comparación del valor del petróleo —que está por el piso— el precio del oro viene en aumento.

Durante los primeros meses del año se presentaron varios atentados contra la infraestructura petrolera. En un comunicado, Ecopetrol manifestó que —con corte al 5 de mayo— se habían presentado 25 atentados, en especial contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá. Los atentados se habría producido en zonas de influencia de las disidencias de las FARC y del ELN y se destaca su incremento luego de que acabara el cese al fuego decretado por el ELN.

Este tipo de acciones generan múltiples afectaciones sociales, económicas y ambientales que se acentúan en la coyuntura del covid-19, ya que las medidas de aislamiento obligatorio dificultan las reparaciones y la adopción de medidas para atender los daños. Durante los cuatro primeros meses del año también se reportó la instalación de válvulas ilícitas sobre los oleoductos en el Catatumbo y Tumaco, por medio de las cuales se roban el crudo.



Fundación Ideas Para La Paz
www.ideaspaz.org
fip@ideaspaz.org